

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diez (10) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE	76001-23-33-000-2019-00806-00
DEMANDANTE	ANA ZULIMA GUERRERO ZAMBRANO Abogado3@acevedogallegoabogados.com
DEMANDADO	NACIÓN- MINDEFENSA – POLICÍA NACIONAL - DISAN
ASUNTO:	ADMITE DEMANDA

ANTECEDENTES

La señora Ana Zulima Guerrero Zambrano a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, pretende¹ la nulidad del Acto administrativo N|S-2019/048912 SECSA-ASJUR 1.10 del 22 de abril de 2019 por medio del cual se negó la solicitud del reconocimiento y pago de las acreencias laborales propias de un empleo público sujeto a una relación LEGAL Y REGLAMENTARIA con la entidad citada.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se declare la existencia de una relación laboral para el período comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 10 de mayo de 2017; se condene a la demandada a realizar el pago de las prestaciones sociales legales y extralegales, tales como prima de navidad, prima de alimentación, prima de navidad, prima de servicio anual, prima vacacional, auxilio de transporte cesantías, y subsidios, el reajuste de los salarios, a pagar la sanción moratoria por el no pago de las acreencia laborales, a reconocer y pagar la devolución de los cancelado por concepto de seguridad social integral y al pago de las costas procesales.

En mérito de lo expuesto, corresponde al Despacho pronunciarse sobre la admisión de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, así:

1. DE LA JURISDICCIÓN

Conforme al artículo 104 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

¹ Ver folios 1-10

2. DE LA COMPETENCIA

2.1. Factor funcional

En cuanto a la competencia funcional el CPACA indica:

"ARTICULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

En el asunto concreto, se pretende la nulidad del acto frente a la negativa de reconocimiento de la existencia de una relación laboral derivada de un contrato realidad y el pago de las acreencias laborales, por lo que resulta ser de carácter laboral y no proviene de un contrato de trabajo, siendo competencia de este Tribunal.

2.2. Factor territorial

En cuanto a la competencia territorial el CPACA señala:

"Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...)

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios."

En el presente asunto, se observa que el último domicilio² donde prestó los servicios la señora fue en Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle ubicada en la ciudad de Cali, en tal sentido se encuentra debidamente configurada la competencia por el factor territorial en el presente asunto.

2.3 Factor Cuantía

El artículo 157 del CPACA señala:

"ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. (...)

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

² Ver folio 2



RADICACIÓN : 2019-00806-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante : ANA ZULIMA GUERRERO ZAMBRANO
Demandado : NACIÓN- MINDEFENSA – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD
Asunto : ADMITE DEMANDA

3

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”

La estimación razonada de la cuantía señalada en el escrito de subsanación de la demanda hace referencia a un tope mayor de los 50 SMLMV³, teniendo en cuenta que existe acumulación de pretensiones, se tiene en cuenta la pretensión mayor que equivale a \$61.463.314 por diferencia salarial⁴.

Por lo anterior la cuantía supera el tope de los 50 SMLMV y esta Corporación es competente para conocer del presente asunto.

3. REQUISITO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

El Despacho advierte que antes de incoar las acciones contencioso administrativas se debe hacer la conciliación prejudicial como lo consagra el artículo 161 del CPACA:

“ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.”

Sin embargo, el parágrafo 2º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2009⁵ consagra lo siguiente:

“Artículo 2º. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.
(...)

Parágrafo 2º. El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.”

Por su parte el Consejo de Estado en Sentencia de Tutela del 8 de febrero de 2018⁶, señaló:

“(…)

³ Art. 152.2 CPACA - **Smlmv 2019** (\$828.116 * 50 = **\$41.405.800**)

⁴ Ver folio 9

⁵ Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

⁶ Consejo de Estado - Sección Cuarta. Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA, Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) - Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00383-01(AC).



RADICACIÓN : 2019-00806-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante : ANA ZULIMA GUERRERO ZAMBRANO
Demandado : NACIÓN- MINDEFENSA – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD
Asunto : ADMITE DEMANDA

4

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.”⁷

*De lo anterior se evidencia, que a la fecha de interposición de la demanda el criterio del Consejo de Estado, respecto de procesos donde se discuta el reconocimiento de una relación legal y reglamentaria, es el de no exigir como requisito de procedibilidad del medio de control, la conciliación prejudicial.
(...)”*

Así pues, la conciliación prejudicial es requisito respecto de derechos inciertos y discutibles, motivo por la que dicha exigencia no es aplicable para el presente asunto.

4. DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Respecto de la caducidad de los medios de control en la interposición de la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento, el CPACA dispone sobre prestaciones periódicas:

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...)

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fé;”

En el presente asunto se demanda un acto que se originó por la negativa de la entidad demandada frente a la reclamación administrativa presentada por la demandante el 28 de marzo de 2019⁸ y esto hace que la interposición de la demanda se realice en cualquier tiempo.

5. DEL PODER Y LA LEGITIMACIÓN EN ACTIVA Y PASIVA.

Con relación a la legitimación por activa, se tiene a esta como la posibilidad que tiene aquella persona que ha sufrido un daño para obtener el resarcimiento mismo por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa.

El artículo 160 del CPACA, respecto al derecho de postulación versa:

“Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.”

A folio 11, obra poder otorgado por la parte demandante, para que se lleven a cabo las presentes diligencias, razón por la cual se encuentra debidamente configurado el derecho de postulación.

⁷ Radicado N° 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter

⁸ Ver folio 3.

Frente a la legitimación y la representación de las entidades dispone el artículo 159 del CPACA:

“Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.”

El apoderado de la parte demandante dentro de la descripción fáctica hecha en el escrito de demanda, hace imputaciones a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Dirección de Sanidad Seccional Valle del Cauca, como quiera que pretende la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral derivada de un contrato realidad y el pago de las acreencias laborales. En ese orden de ideas, la parte demandante y la entidad demandada están legitimadas, por activa y por pasiva respectivamente, para actuar en las presentes actuaciones.

Ahora bien, la entidad demandada resulta ser del orden nacional por lo que debe darse aplicación a las siguientes normas:

El artículo 610 del CGP indica la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en la que intervengan entidades públicas, para defender los intereses patrimoniales del Estado.

Pues bien, el Decreto 4085 de 2011, respecto del objetivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señala:

"ARTÍCULO 2o. OBJETIVO. *La Agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación. Evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.*

PARÁGRAFO. *Para efectos este decreto. Entiéndase por intereses litigiosos de la Nación, los siguientes:*

a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública del orden nacional por ser parte en un proceso."

Por tratarse en el presente asunto de una entidad del orden nacional, se deberá notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al correo electrónico, conforme lo indica el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1365 de 2013 que dice:

"Para efectos de las notificaciones personales que se deban realizar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se entenderá que el correo electrónico cumple los mismos propósitos que el servicio postal autorizado para enviar la copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En estos casos, no será necesaria la remisión física de los mencionados documentos".

6. DE LOS REQUISITO FORMALES.

De igual forma se cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 162 (requisitos de la demanda⁹), 163 (individualización de pretensiones) y 164 (oportunidad de la demanda) de la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior se allegaron los anexos pertinentes que exige el art. 166, incluyendo copia de la demanda en mensaje de datos para los efectos del inciso 3 del art. 199, modificado por el art. 612 de la Ley 1564 de 2012.

Por reunir los requisitos legales el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la demanda instaurada por la señora **ANA ZULIMA GUERRERO ZAMBRANO** por medio de apoderado judicial, en contra de la **NACIÓN- MINDEFENSA – POLICÍA NACIONAL- SECCIONAL DE SANIDAD DEL VALLE DE CAUCA** y en consecuencia dispone:

SEGUNDO: NOTIFICAR este auto al demandante en la forma prevista en el artículo 201 del CPACA, quien podrá consultarlo en la página web: www.ramajudicial.gov.co.

TERCERO: No hay lugar a fijar gastos ordinarios del proceso, pues la notificación personal corresponde a la parte actora; no obstante, de requerirse expensas, éstas se fijarán en su oportunidad.

CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia a la parte demandada **NACIÓN-MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL - SECCIONAL DE SANIDAD DEL VALLE DE CAUCA**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** a los buzones de correos electrónicos creados por dichas entidades

⁹ Designación de las partes: folio 1
Pretensiones: folios 1-2
Hechos y omisiones: folios 2-3
Fundamentos de derecho: folios 3-7
Pruebas: folio 7-8
Estimación razonada de la cuantía: folio 8-9
Dirección para notificación: folios 9-10

para efecto de recibir notificaciones judiciales. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, la notificación se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje.

QUINTO: CREAR en SharePoint el expediente digital con la demanda y sus anexos que obran en CD aportado con la demanda (fl. 13), el acta de reparto (fl. 55) y compartirá el vínculo para la notificación al demandado. **Con la notificación del auto se insertará el vínculo para consultar el expediente digital en SharePoint.**

SEXTO: CORRER traslado de la demanda a la **NACIÓN-MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL - SECCIONAL DE SANIDAD DEL VALLE DE CAUCA**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvención, acorde con el artículo 172 del CPACA. Este plazo comenzará a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación, como dispone el artículo 199 del CPACA.

SÉTIMO: ORDENAR a las entidades demandadas que durante el tiempo para dar respuesta a la demanda, deberá allegar con la contestación, **el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación que se demanda y se encuentre en su poder.** La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto (artículo 175, parágrafo 1º del CPACA).

OCTAVO: Se advierte a los sujetos procesales que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 806 de 2020, la contestación de la demanda y demás memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán presentarse al correo electrónico de la secretaria rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales. **De igual forma, se hace necesario que en los memoriales y correos que envían, se identifique con claridad el NÚMERO DE RADICADO DEL PROCESO CON LOS 23 DÍGITOS SEPARADOS POR GUIÓN, NOMBRE DEL MAGISTRADO PONENTE, NOMBRE DEL DEMANDANTE y EL ASUNTO.**

NOVENO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar, como apoderado de la parte demandante, al abogado SEBASTIAN RUIZ MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.128.445.256 y portador de la tarjeta profesional nro. 268.836, del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos a que alude el memorial poder presentado¹⁰,

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada

¹⁰ Ver folio 11